

Capítulo 2

El COT y la situación fronteriza de la Amazonía: identificación de actores y principales conflictos*

DOI: <https://doi.org/10.25062/9786287602649.02>

Alejandra Cerón Rincón
Darío Enrique Cortés Castillo

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"

Resumen: La región de la Amazonía presenta una situación de pobreza y desintegración social alta, lo que ha favorecido el crecimiento del Crimen Organizado Transnacional (COT) en la región; de esta manera, los flujos migratorios, el comercio y las actividades agrícolas, la ganadería y la explotación de los recursos naturales se han visto afectados por la incursión de grupos de violencia organizada que paulatinamente ejercen control e influencia sobre los destinos de estos territorios, y hacen así que la situación de inseguridad, en términos de control ciudadano, sea difícil, y que, a su vez, se presenten afectaciones para la seguridad nacional. Este capítulo caracteriza las principales condiciones sociodemográficas que dan contexto a la situación de amenazas a la seguridad, así como las principales conformaciones criminales presentes en el territorio.

Palabras clave: Amazonía; crimen organizado; actores; conflicto; medio ambiente.

* Capítulo de libro resultado del proyecto de investigación *El crimen organizado en la Amazonía: escenario de desafíos para la seguridad regional*, del grupo de investigación "Masa crítica", de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", categorizado en A1 por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias), y registrado con el código COL0123247. Los puntos de vista y los resultados de este capítulo pertenecen a los autores, y no necesariamente reflejan los de las instituciones participantes.

Alejandra Cerón Rincón

Doctora, Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia. Magíster, Gestión de Organizaciones, UQAC, Canadá. Socióloga, Universidad Nacional de Colombia. Docente investigadora, Centro Regional de Estudios Estratégicos en Seguridad, Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", Colombia.

<https://orcid.org/0000-0002-5642-7949> - Contacto: luz.ceron@esdeg.edu.co

Darío Enrique Cortés Castillo

Magíster, Inteligencia Estratégica, Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia "Brigadier General Ricardo Charry Solano", Colombia. Magíster, Inteligencia Estratégica y Prospectiva, Universidad Jaume I, Castellón, España. Profesional, Ciencias Militares, Escuela Militar de Cadetes "General José María Córdoba", Colombia. Docente investigador, Departamento Estrategia, Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", Colombia.

<https://orcid.org/0000-0002-7593-1673> - Contacto: dario.castillo@esdeg.edu.co

Citación APA: Cerón Rincón, A., & Cortés Castillo, D. E. (2023). El COT y la situación fronteriza de la Amazonía: identificación de actores y principales conflictos. En A. Cerón Rincón (Ed.), *El crimen organizado en la Amazonía: escenario de desafíos para la seguridad regional* (pp. 35-60). Sello Editorial ESDEG.
<https://doi.org/10.25062/9786287602649.02>

EL CRIMEN ORGANIZADO EN LA AMAZONÍA: ESCENARIO DE DESAFÍOS PARA LA SEGURIDAD REGIONAL

ISBN impreso: 978-628-7602-63-2

ISBN digital: 978-628-7602-64-9

DOI: <https://doi.org/10.25062/9786287602649>

Colección Estrategia, Geopolítica y Cultura

Sello Editorial ESDEG

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes prieto"

Bogotá D.C., Colombia

2023



Introducción

Los territorios que componen la región de la Amazonía, históricamente, han sido escenario del desarrollo de conflictos; la mayoría de ellos, relacionados con la ocupación de la tierra y sus impactos sobre los pobladores y los ecosistemas de la zona, lo cual ocasiona graves afectaciones para el contexto de la seguridad, y para el desarrollo de las políticas públicas asociadas al bienestar general.

Este capítulo explora el reconocimiento de algunos de los conflictos y la participación de actores y la conformación de grupos de intereses que participan en el ámbito de la seguridad, al igual que la forma como estas configuraciones afectan la construcción de tejido social para los pobladores y para la identificación cultural y étnica que tiene lugar en dichas zonas.

El resultado de esta construcción aporta información respecto a la forma como se han construido las estructuras del crimen organizado, en torno a las dinámicas y los intereses de los pobladores de la región, que ya conforman situaciones de interculturalidad.

Para el caso concreto de la Amazonía colombiana, que corresponde a una extensión de 476.000 km² y al 41,8 % del territorio nacional, y en la que se encuentran los departamentos de Guainía, Vaupés, Vichada y Amazonas, en relación con la Gran Cuenca, situada al noroccidente del país, representa el 6.4 % del total del bioma amazónico (Cepal, 2013), y se extiende a través de las fronteras con Perú y Brasil. Sus características selváticas, la ausencia de vías de comunicación y la escasa presencia estatal, que configuran áreas inexpugnables, hacen de este territorio un espacio ideal para la incubación y proliferación de las organizaciones del COT.

La existencia en este vasto territorio de pistas clandestinas, a las que se suman las vías fluviales que vierten sus aguas en los ríos Amazonas, Apaporis, Caquetá, Guaviare, Inírida, Putumayo y Vaupés, constituye una serie de rutas de difícil control, que beneficia y proyecta hacia el exterior la actividad delictiva (Mejía et al., 2019).

Además, la posición de triple frontera le confiere a este territorio características que les dan a los delincuentes la condición de nacionales de uno u otro país, lo cual les permite cruzar las líneas divisorias y evadir a la autoridad, lo que, a su vez, les da la connotación de delincuentes transnacionales. Desde este panorama, considerado el comercio de drogas ilícitas uno de las principales expresiones del COT, que, a la vez, fomentan otras expresiones delictivas como el tráfico de armas, el contrabando, la corrupción y la trata de personas, entre otros ilícitos, en Latinoamérica merecen especial atención regiones geográficas como el trapecio Amazónico, que, por sus características geográficas, demográficas, económicas y de ausencia de los Estados, se constituye en escenario de especial interés para las organizaciones del crimen transnacional y el desarrollo de su empresa criminal. Las consideraciones expuestas, aunadas a la naturaleza no convencional de los actores, configuran un complejo entramado que pone en riesgo la existencia del ecosistema, la permanencia de los Estados y la vida de los seres humanos.

En relación con la metodología de investigación, este capítulo explora la consideración de los actores y su relación con los conflictos presentes en la zona, desde una revisión bibliográfica y documental que reúne las principales características sociodemográficas de los territorios colombianos, así como las principales dinámicas conflictivas de la región y sus actores más reconocidos.

Algunas consideraciones históricas sobre el conflicto en la Amazonía y sus actores

Desde una perspectiva histórica, el Estado colombiano ha fomentado la construcción de tejido social y presencia institucional en la zona dando prioridad a la ocupación de los territorios de la alta Amazonía (Caquetá, Guainía, Vaupés y Guaviare), mientras que la zona de planicie y selva tropical, ubicada en los límites con el Brasil y Perú ha sido menos intervenida por el Estado. Esta última situación propicia la consolidación de poderes locales basados en economías ilícitas cuyas dinámicas incluyen la movilización de pobladores de territorios pertenecientes a países vecinos.

El mayor testimonio de esta situación histórica se gestó durante el ciclo de la explotación del caucho (1879 y 1912), actividad que se fortalecía en la zona en la medida en que crecía la demanda internacional de este producto por parte de fábricas de automóviles; “esto generó grandes transformaciones en los territorios amazónicos, especialmente en la frontera de Colombia con Brasil y Perú, al darse en estos países la recolección, acopio y exportación de materia prima” (Londoño, 2015, p. 118).

Durante esta época existió en la Amazonía de la triple frontera “la ocupación violenta por parte de los caucheros especialmente peruanos, que ocupaban territorios y asesinaban indios, como es el conocido caso de la casa Arana” (Palacio, 2006, p. 6). Julio César Arana expandió poco a poco su negocio transportando el producto del caucho desde el Putumayo hacia Iquitos y Manaos, y en 1903 se estableció en La Chorrera, estación que se convertiría en el principal centro de acopio. A partir de ese momento comenzó a monopolizar todo el proceso del producto apoyándose en las autoridades y las Fuerzas Militares (FF. MM.) del Perú, hasta convertirse en el mayor emporio de la región;

Arana, con apoyo del ejército peruano, que se había instalado por orden de su presidente Eduardo López Romaña en el territorio colombiano de Tarapacá — con el afán de legitimar este territorio como peruano—, comenzó a impedir el paso de los barcos colombianos por el río Putumayo, así como a desplazar a otros caucheros y colonos, despojándolos de sus tierras y barracas. Entonces Julio César Arana dejó de ser intermediario del preciado látex, para convertirse en dueño y señor de la empresa cauchera más importante de todos los tiempos en el gran Putumayo. (Sierra, 2011, p. 264)

En la actualidad, los actores y dinámicas presentes en la zona de la Amazonía asociadas al COT están directamente conectadas con los problemas más graves presentes en la región, y que refieren al abandono estatal, la presencia de grupos armados y los conflictos violentos derivados de la economías ilícitas, que han estado presentes a lo largo de dos siglos de historia en la región, y ahora, con las dinámicas del COT y el tráfico de productos ilícitos, se conecta con los mercados mundiales y obliga a los indígenas a involucrarse en estas actividades como única opción de subsistencia.

En la Amazonía se observa un aumento de las actividades asociadas a las economías extractivas ilegales que se concentran en la explotación de oro y coltán generando afectaciones a los pobladores de la región, que en su mayoría son indígenas, así como al ecosistema amazónico en general. Lo anterior, combinado con acciones de narcotráfico y otros tráficos ilegales y deforestación.

Las dinámicas poblacionales en la frontera Colombia-Brasil

La densidad poblacional de la zona de frontera es relativamente baja: para el caso de Colombia, en 2008 se calculó un habitante por cada 1,79 km² (Fundación

Seguridad y Democracia, 2008), y la mayoría de la población se concentró en las ciudades capitales Leticia y Mitú. En el lado brasileño vivían 24 millones de personas.

Los datos demográficos de las poblaciones de frontera del lado de Colombia fueron recogidos por última vez en el censo de 2005, y fueron refrendados por un estudio del Instituto SINCHI en 2008 (López, 2009). Sobre dichos estimados, se puede caracterizar una composición principalmente rural en toda la región, característica que se confirma según los datos poblacionales discriminados por departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas.

Tabla 1. *Distribución poblacional en el departamento de Guainía*

Departamento de Guainía-municipio	Cabecera	Resto	Total
Barrancominas	0	4.384	4.384
Cacahual	0	1.592	1.592
Inírida	10.793	7.073	17.866
La Guadalupe	0	225	225
Mapiripana	0	3.072	3.072
Morichal	0	752	752
Paná Paná	0	2.224	2.224
Puerto Colombia	0	3.753	3.753
San Felipe	0	1.362	1.362
Total, Guainía	10.793	24.437	35.230

Fuente: López (2009, p. 21).

Tabla 2. *Distribución poblacional en el departamento de Vaupés*

Departamento de Vaupés-municipio	Cabecera	Resto	Total
Carurú	635	2.607	3.242
Mitú	13.066	15.316	28.382
Pacoa	0	4.459	4.459
Papunaua	0	879	879
Taraira	175	873	1.048
Yavaraté	0	1.269	1.269
Total, Vaupés	13.876	25.403	39.279

Fuente: López (2009, p. 22).

Tabla 3. Distribución poblacional en el departamento de Amazonas

Departamento de Amazonas-municipio	Cabecera	Resto	Total
El Encanto	0	4.376	4.376
La Chorrera	0	3.337	3.337
La Pedrera	0	3.711	3.711
La Victoria	0	979	979
Leticia	23.811	14.021	37.832
Mirití Paraná	0	1.643	1.643
Puerto Alegría	0	1.277	1.277
Puerto Arica	0	1.440	1.440
Puerto Nariño	1.848	5.135	6.983
Puerto Santander	0	2.373	2.373
Tarapacá	0	3.775	3.775
Total, Amazonas	25.659	42.067	67.726

Fuente: López (2009, p. 20).

Respecto al comparativo por regiones, se observa que la mayoría de la población está concentrada en la región suroriental, y ello hace más notorio el abandono y la falta de presencia estatal en la región noroccidente.

Tabla 4. Población en las regiones noroccidental y suroriental de la Amazonía

Departamento-municipio	Región noroccidental			Región suroriental		
	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total
El Encanto	0	0	0	0	4.376	4.376
La Chorrera	0	0	0	0	3.337	3.337
La Pedrera	0	0	0	0	3.711	3.711
La Victoria	0	0	0	0	979	979
Leticia	0	0	0	23.811	14.021	37.832
Mirití Paraná	0	0	0	0	1.643	1.643
Puerto Alegría	0	0	0	0	1.277	1.277
Puerto Arica	0	0	0	0	1.440	1.440
Puerto Nariño	0	0	0	1.848	5.135	6.983
Puerto Santander	0	0	0	0	2.373	2.373
Tarapacá	0	0	0	0	3.775	3.775
Total, Amazonas	0	0	0	25.659	42.067	67.726

Departamento- municipio	Región noroccidental			Región suroriental		
	Cabecera	Resto	Total	Cabecera	Resto	Total
Barrancominas	0	562	562	0	3.822	3.822
Cacahual	0	0	0	0	1.592	1.592
Inírida	10.793	562	11.355	0	6.511	6.511
La Guadalupe	0	0	0	0	225	225
Mapiripana	0	263	263	0	2.809	2.809
Morichal	0	0	0	0	752	752
Paná Panamá	0	0	0	0	2.224	2.224
Puerto Colombia	0	0	0	0	3.753	3.753
San Felipe	0	0	0	0	1.362	1.362
Total, Guainía	10.793	1.387	12.180	0	23.050	23.050
Carurú	0	20	20	635	2.587	3.222
Mitú	0	0	0	13.066	15.316	28.382
Pacoa	0	0	0	0	4.459	4.459
Papunaua	0	0	0	0	879	879
Taraira	0	0	0	175	873	1.048
Yavaraté	0	0	0	0	1.269	1.269
Total, Vaupés	0	20	20	13.876	25.383	39.259

Fuente: López (2009, p. 29).

Pobreza y tejido social

Según las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2018), en la región los niveles de pobreza y abandono son alarmantes, ya que alcanzan en algunos casos el 90 % de necesidades básicas insatisfechas. En una descripción por cada uno de los departamentos que demarcan la zona fronteriza colombiana (Amazonas, Vaupés y Guainía) se puede observar la concentración de estas condiciones desfavorables en algunos municipios, que también presentan la mayor densidad poblacional. En la figura 1 se detallan los indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI) por departamento y municipios.

Figura 1. Necesidades básicas insatisfechas en la región de la Amazonía.

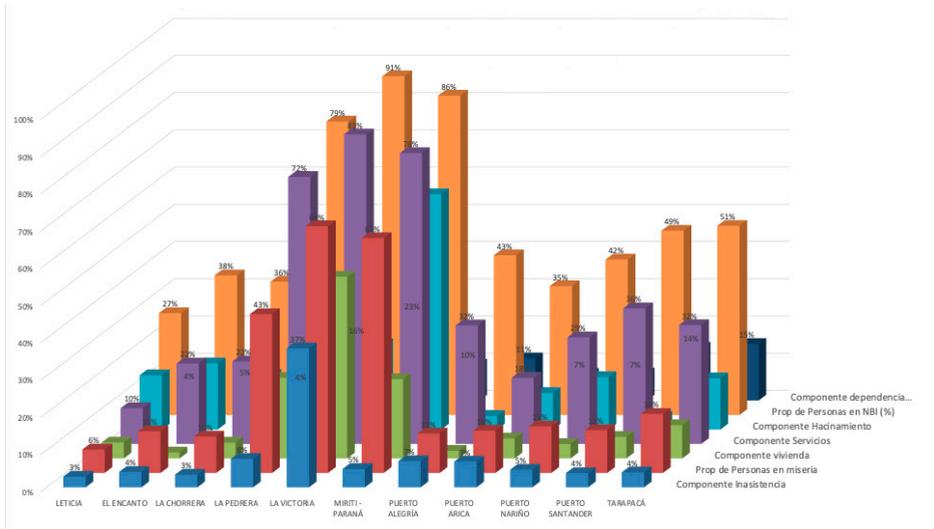


Tabla 5. Necesidades básicas insatisfechas en los municipios del departamento de Amazonas.

	Componente Inadecuación de vivienda	Componente Servicios	Componente Hacinamiento	Componente Dependencia económica	Proporción de personas en miseria
LETICIA	3%	10%	15%	27%	4%
EL ENCANTO	4%	22%	18%	38%	5%
LA CHORRERA	3%	22%	15%	36%	4%
LA PEDRERA	8%	72%	38%	79%	16%
LA VICTORIA	37%	83%	23%	91%	23%
MIRITI - PARANÁ	5%	78%	63%	86%	10%
PUERTO ALEGRÍA	7%	32%	4%	43%	11%
PUERTO ARICA	7%	18%	10%	35%	7%
PUERTO NARIÑO	5%	29%	14%	42%	7%
PUERTO SANTANDER	4%	36%	35%	49%	14%
TARAPACÁ	4%	32%	14%	51%	15%

Fuente: DANE (2018).

En el departamento de Amazonas los municipios de La Pedrera, Victoria y Mirití-Paraná tienen los niveles más altos de población con NBI, con un porcentaje del 79 %, el 91 % y el 86 % respectivamente.

Figura 2. Necesidades básicas insatisfechas en los municipios del departamento de Vaupés.

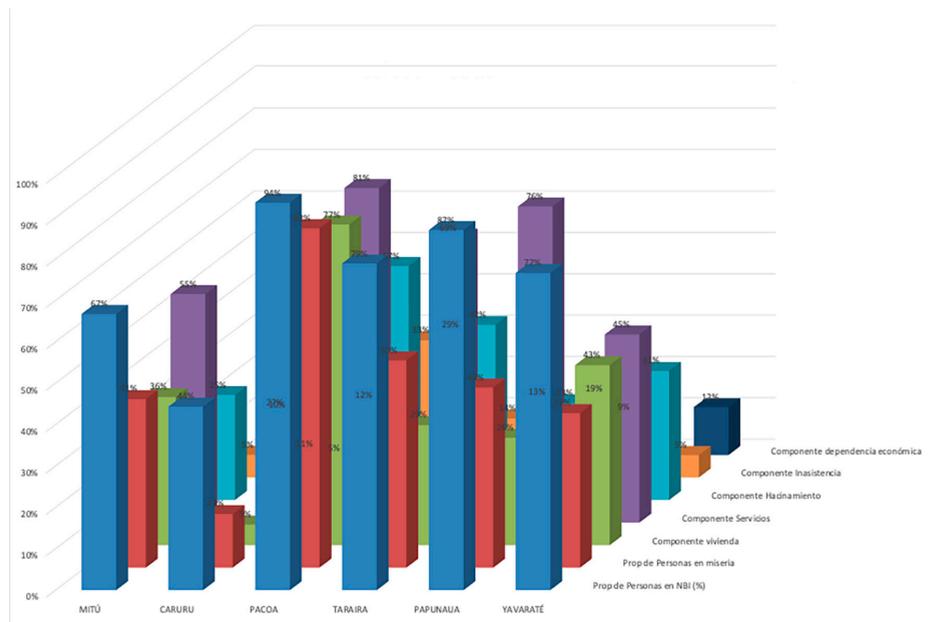


Tabla 6. Necesidades básicas insatisfechas en los municipios del departamento de Vaupés

	Prop de Personas en NBI (%)	Prop de Personas en Miseria	Componente Vivienda	Componente Servicios	Componente Hacinamiento	Componente Inasistencia	Componente dependencia económica
MITÚ	67%	41%	36%	55%	25%	5%	10%
CARURU	44%	13%	5%	27%	11%	5%	12%
PACOA	94%	82%	77%	81%	57%	33%	29%
TARAIRA	79%	50%	29%	69%	42%	14%	13%
PAPUNAUA	87%	44%	26%	76%	23%	19%	9%
YAVARETE	77%	37%	43%	45%	31%	5%	12%

Fuente: DANE (2018).

Para el departamento de Vaupés los indicadores más altos de NBI se encuentran en las poblaciones de Pacoa, Taraira y Papunaua, con el 94 %, el 79 % y el 87 %, respectivamente.

Figura 3. Necesidades básicas insatisfechas en los municipios del departamento de Guainía.

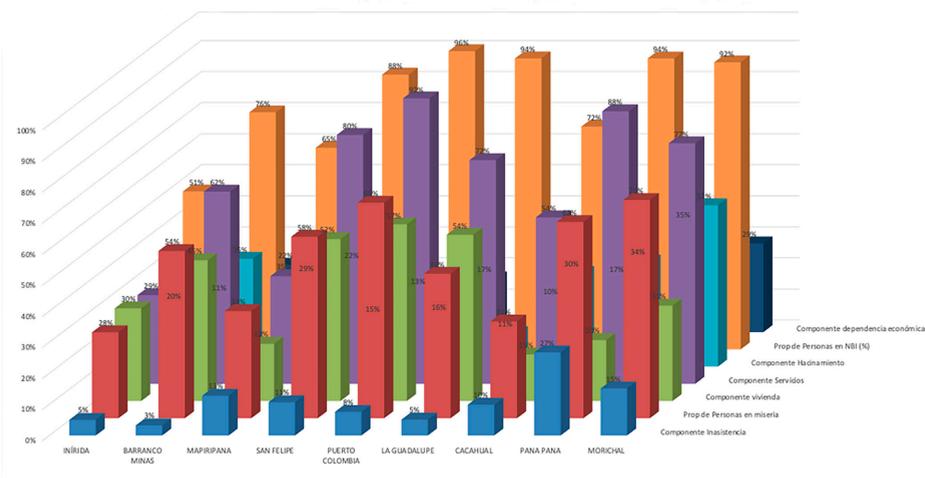


Tabla 7. Necesidades básicas insatisfechas en los municipios del departamento de Guainía.

	Componente Inasistencia	Prop de Personas en Miseria	Componente Vivienda	Componente Servicios	Componente Hacimientos	Prop de Personas en NBI (%)	Componente dependencia económica
INIRIDA	5%	28%	30%	29%	20%	51%	11%
BARRANCO MINAS	3%	54%	45%	62%	35%	76%	22%
MAPIRIPANA	13%	34%	18%	35%	29%	65%	22%
SAN FELIPE	11%	58%	52%	80%	15%	88%	13%
PUERTO COLOMBIA	8%	69%	57%	92%	16%	96%	17%
LA GUADALUPE	5%	46%	54%	72%	11%	94%	10%
CACAUAL	10%	31%	15%	54%	30%	72%	17%
PANA PANA	27%	63%	20%	88%	34%	94%	35%
MORICHAL	15%	70%	31%	77%	52%	92%	29%

Fuente: DANE (2018).

En el caso del departamento de Guainía los municipios con mayor porcentaje de personas con NBI se concentran en San Felipe, Puerto Colombia y La Guadalupe, con indicadores del 88 %, el 96 % y el 94 %, respectivamente.

En relación con el crecimiento demográfico, este se ha caracterizado por ser estable y no mostrar variaciones significativas relacionadas con fenómenos como la migración o el tránsito de personas.

Tabla 8. Evolución y proyección de la población en la frontera Colombia-Brasil

LOCALIDADES	1973	1974	1980	1985	% Acum.	1988	1990	1995	2000
COLOMBIA									
Comisaría Amazonas	15,667	-	-	39,327	5,7	35,712	39,825	52,296	68,67
Leticia	8,311	-	-	19,245	7,2	23,705	27,241	38,565	54,6
Taparaca	895	-	-	1,35	3,5	1,5	1,6	1,9	2,262
La Pedrera	501	-	-	1,14	7,1	1,4	1,61	2,26	3,19
Comisaría Vaupes	-	-	-						
Taraira (1)	-	-	-	110		3	3,5	4,5	4,5
TOTAL	9,707			21,845	-	29,605	33,951	47,225	64,552
BRASIL									
Parte Edo. de Amazonas	-	-	23,736	-	-	-	-	-	-
Tabatinga		2,421	6,56	7,713	3,3	8,5	9,069	10,663	12,537
Villa Ipiranga	-	586	551	551	-1,2	503	503	503	503
Villa Bittencourt	-	530	376	402	1,39	420	431	609	652
Sta. Rita do Weil	-	528	498	653	5,6	770	858	1,127	1,48
TOTAL	-	4,065	7,985	9,319	-	10,193	10,861	12,902	15,172

Fuente: IBGE-Brasil; DANE, censo de población 1973/1975-Colombia.

En relación con los servicios de salud y educación, estos tienen bajos niveles de calidad y de cobertura; la mayoría de los establecimientos educativos en zona de frontera son de carácter estatal, así como de difícil acceso para la población que se encuentra apartada de las capitales.

En años recientes, las catástrofes naturales derivadas del cambio climático y la acción humana, con actividades como la tala ilegal y las quemadas para cultivos, ocasionaron numerosos incendios en la zona de la Amazonía brasileña, donde se

reportaron las cifras más altas de la historia de ese país, con un total de 2.308 incendios para junio de 2020 (Noticias *France 24*, 2020).

Otro factor que ha afectado considerablemente las dinámicas poblacionales de la zona está relacionado con la pandemia del Covid-19, pues la región del Amazonas ha sido una de las más afectadas de Colombia; de igual manera, los resultados en Tabatinga han sido preocupantes para el Gobierno brasileño:

Los resultados del análisis que abarcó desde el inicio de la pandemia hasta el 31 de diciembre de 2020 arrojaron que la mortalidad en indígenas del departamento del Amazonas fue 2.6 veces más alta que en el nivel nacional; además, los casos importados (traídos del exterior), fueron 20 veces mayores que en cualquier otro lugar del país. Este último dato, ..., se debe a que Leticia se encuentra muy cerca de Tabatinga, una ciudad ubicada en Brasil, y que "culturalmente se comportan como un solo territorio". En consecuencia, y debido a las tenues (y casi nulas) restricciones de Brasil para contender la pandemia "y en un contexto como el de Leticia, en un extenso territorio fronterizo poco controlado, llevó a que las personas se desplazaran en busca de trabajo, precios más económicos en el comercio y para continuar con sus actividades de esparcimiento. (Zamora, 2021, p. 12)

Con los componentes ya descritos se reiteran las condiciones históricas del abandono estatal y la baja cohesión social, originada, principalmente, por la dificultad para el tránsito y las comunicaciones en la región.

El crimen organizado transnacional y el nuevo orden social de la región

La formación de las actuales estructuras criminales en la Amazonía colombiana tiene una conexión directa con los fenómenos propios del siglo XX, en el sentido de que las fuerzas económicas de la región se han configurado de manera violenta y por las vías de la dominación sobre las poblaciones. Esto ha sido posible por las características geográficas del territorio, sumadas a la poca conciencia política sobre su valor. El abandono estatal parece un hecho constante que genera vacíos de poder y facilita las prácticas de patronazgo y poder por vía del uso de la fuerza en los territorios.

Con la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC-EP, en los territorios nacionales donde estos grupos tenían influencia se generó un "vacío de

poder”, en el sentido de que en muchos de esos espacios la interacción de las poblaciones con el Estado a través de los organismos públicos es muy débil y, por tanto, el control lo ejercían las antiguas guerrillas. En consecuencia, y de manera acelerada, los excombatientes de las FARC-EP que no se unieron al proceso de implementación de la paz, junto con otras fuerzas al margen de la ley, como es el caso del paramilitarismo y las organizaciones criminales, han ido acaparando el poder en estos espacios, cooptando todos los procesos y acciones relacionados con el tráfico de drogas, armas, personas, minerales, etc.

Para obtener un mayor lucro de estas actividades, los actores mencionados se han conectado con los grupos y rutas del COT que proveen un mercado de drogas, personas, armas, piedras preciosas y minerales al mundo entero, y han interconectado negocios y personas a través del control de las rutas de transporte y la inversión de capitales para tales actividades.

En este panorama, la región de la Amazonía en zona de fronteras entre Colombia y Brasil ha visto el desmonte de la presencia guerrillera por la aparición y rearme de los antiguos combatientes de las FARC-EP, que ahora aparecen integrados a estructuras y nodos de criminalidad cuyo fin último es el lucro por los negocios ilegales. La violencia, por tanto, no ha dejado de ser una constante en la zona, pero ahora actúa con otras características, que ya no se relacionan con las ideologías políticas, sino que, más bien, se refieren a las bandas o combos de actividades delictivas.

El marco de implementación de las políticas de paz determinó que la parte del Amazonas colombiano limítrofe con el Brasil no hace parte de las zonas priorizadas para los planes de paz. Ello hace que el territorio quede expuesto aún más al control de los grupos armados. En términos generales, se puede observar que la firma de acuerdos de paz en distintos conflictos alrededor del mundo es un paso inicial hacia la construcción de caminos de paz. En tal sentido, la implementación de la política derivada requiere ajustes conforme se encuentran situaciones no previstas, como las que se describen en esta investigación.

En este contexto, las poblaciones indígenas, que representan a la mayoría de los habitantes, son vulnerables, una vez más, al control foráneo proveniente de las estructuras criminales, lo cual hace que, sin más expectativas de supervivencia, los naturales empiecen a “vender” sus conocimientos sobre las características de los territorios y los ríos para facilitar las rutas de salida de los productos ilícitos. En consecuencia, las formas de vida tradicionales, que ya fueron debilitadas desde siglos anteriores por la economía del caucho, vuelvan a ser golpeadas por esa forma

de la globalización criminal. De igual forma, la seguridad ambiental está siendo gravemente afectada por las actividades de la minería, que trae consigo el envenenamiento de las aguas y la erosión de tierras.

En esta problemática, no es claro cómo la inversión de capitales privados puede “no” contribuir a esta catástrofe social y ambiental; antes bien, los planes de inversión en la zona contemplan la destrucción de considerables extensiones de selva, con fines de ganadería extensiva o complejos turísticos.

La investigación sobre esta problemática y sus afectaciones a la seguridad de las naciones implicadas, así como de la región en general, merece especial atención por parte de académicos, organizaciones internacionales y no gubernamentales, al igual que de la veeduría ciudadana, a fin de definir de manera más clara el problema público al cual estas situaciones llevan, así como las responsabilidades que su atención requiere.

Incidencia del crimen organizado transnacional en la Amazonía

Para el caso colombiano, a partir de 2016, año en que se dio la desmovilización de las extintas FARC, en la región amazónica, que comprende los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, las afectaciones a esta importante región del planeta adquirieron una nueva dinámica. Al respecto, tras la aceptación del proceso de paz que concluyó con la desmovilización de la mayoría de los frentes guerrilleros, surgieron disidencias que, en desaprobación de los acuerdos, continuaron por el camino de la clandestinidad y del delito (Cortés, 2020); coincidiendo con otras expresiones armadas ilegales y la corrupción, dichas facciones han sumido la región en una grave crisis de seguridad multidimensional, humanitaria y ambiental (FIP y Adelphi, 2021).

Desde este contexto, en la región amazónica y sus alrededores la persistencia de los frentes 1, 7, 16, 40, 43, 62 configuró en torno al negocio del narcotráfico un entramado delictivo internacional que, a partir de la división de responsabilidades, garantiza la sincronización de la empresa delictiva. Por una parte, los frentes 40 y 62, al sur del departamento de Meta, asumieron el control de los cultivos de uso ilícito, mientras que los frentes 1 y 7 controlan los laboratorios y cristalizadores, y los frentes 1, 16, 43 y Acacio Medina manejan la distribución de la coca hacia Brasil y Venezuela. Este nivel de coordinación los ha llevado al establecimiento de alianzas

con otras organizaciones, como El Clan del Golfo, mediante lo cual garantizan el control de los corredores de movilidad terrestres y fluviales (Cajiao et al., 2018).

Complementando, desde el departamento de Putumayo, otra área de la región amazónica, los frentes 1, 32 y 48, que por tradición impulsaron el cultivo de amplias extensiones de coca en el territorio, aprovechando la ausencia estatal, la posición de frontera con Ecuador y la existencia de los corredores de movilidad naturales que configuran los ríos Putumayo y San Miguel, por los que se comercializa la coca hacia Perú y Brasil, fortalecieron sus actividades ilícitas tomando como área base para sus actividades los municipios de Puerto Limón, Puerto Guzmán y Puerto Asís (Villalba, 2019).

A la presencia de las estructuras de las extintas FARC se suman organizaciones como Los Caqueteños, cuya función de intermediación en el negocio de la coca permite el enlace entre cultivadores y procesadores de la pasta base y la posterior comercialización a los mercados de Europa y los Estados Unidos (Cajiao et al., 2018).

Mafias brasileñas

Las actividades de los grupos delincuenciales colombianos se complementan con la presencia de las mafias brasileña, peruana y mexicana, entre las que se destacan los grupos brasileños el Primer Comando de la Capital (PCC), el Comando Vermelho (CV) y La Familia do Norte (FDN), cuyo centro de operaciones se ubica en la región de Tabatinga y Manaus, y cuyo objetivo central es el control de los centros de reclusión y de la Amazonía brasileña y, como especial propósito, el dominio de la ruta del río Solimões, las ciudades de Manaus y Tabatinga (Quirós, 2019).

Mafias peruanas

Por su parte, las mafias peruanas organizadas en clanes familiares con asiento en la provincia de Ramón Castilla —y en particular, la zona de Caballococha, la región de Tingo María y de Loreto— extienden sus tentáculos hacia Colombia, con especial incidencia sobre los departamentos de Amazonas, Cauca, Putumayo y Valle del Cauca, donde han establecido contacto con integrantes de Los Pelusos, Los Caqueteños y las disidencias de las FARC. Lo expuesto se complementa con la identificación de Perú como uno de los mayores productores de hoja de coca y cocaína del mundo, junto con Colombia y Bolivia; según la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, la producción de coca en Perú

aumentó en el 13 % respecto al año 2020, hasta alcanzar un máximo de 88.200 ha cultivadas (ONDCP, 2021).

La importancia del territorio peruano en la ecuación del narcotráfico reside en que en el territorio hay grandes extensiones de cultivo de coca, operados por colombianos y los cuales son objeto de mejoras genéticas que permiten producir mejores semillas, incrementar las cosechas de 2 a 4 al año y que el cultivo se adapte de los tradicionales 600 metros sobre el nivel del mar (msnm) en las zonas húmedas de la cordillera, a los 40 msnm en las zonas de selva baja y la existencia de los laboratorios de procesamiento de coca (Montaño, 2022).

Las condiciones de ausencia estatal, pobreza, precariedad y condiciones topográficas agrestes que caracterizan la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil se constituye en el escenario idóneo para la instalación de nuevas organizaciones del narcotráfico, como es el caso de las mafias serbias, que, bajo el nombre de Grupo América y de la mano con los clanes peruanos de la droga, despliega su operación en territorio peruano.

Mafias mexicanas

En la región amazónica, la presencia y posicionamiento de los carteles mexicanos se produjo con el declive de los carteles colombianos. El Cartel de Sinaloa fue la organización que a partir de 2018 incursionó de manera más activa sobre la confluencia de las fronteras entre Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, donde adoptó la provincia de Mariscal Ramón Castilla, del departamento de Loreto, en Perú, como su centro de operaciones, y donde han implementado la figura de benefactores que bajo el modelo del "derecho a la comunidad" hacen retribuciones económicas a los cultivadores y líderes naturales, con lo que legitiman ante la comunidad la actividad ilegal. De acuerdo con Oscar Llapasca Samaniego, el impacto de la presencia de las organizaciones del narcotráfico en esta región ha llevado al incremento de las zonas de cultivo entre la frontera con "Colombia, el Yavari, Putumayo, Napo y Bajo Amazonas" (Huerta, 2022, párr.17).

Funcionalidad y alianza de las redes

Con la salida de las FARC del lucrativo negocio del narcotráfico (ONU, 2021), en la región amazónica incursionó una multiplicidad de actores de diversa naturaleza y nacionalidad, quienes en unos casos establecieron alianzas y acuerdos, mientras que, por otra parte, se sellaron sangrientas disputas por el control de la producción, rutas y comercialización de los narcóticos. De esta manera, dentro de las

alianzas destaca la establecida entre Los Caqueteños, la Familia do Norte (FDN) y las mafias peruanas, en la que Los Caqueteños se encargan de adquirir la pasta de coca del departamento de Putumayo y trasladarla, para su refinamiento, a laboratorios peruanos, y que luego del procesamiento es enviada por los ríos Putumayo y Amazonas a las ciudades de Manaus y Tarapacá, en Brasil, donde el FDN se encarga de su posterior envío al mercado europeo (Soto, 2017), vía África occidental.

La presencia de la FDN en Colombia se remonta a 2006, cuando integrantes de dicha organización, haciendo uso de la actividad del peruano Nelson Flores Collantes, alias Acuario, narcotraficante y proveedor de drogas y armas a las extintas FARC, hicieron contacto con Los Caqueteños. De esta manera se cerraba el círculo de intereses. Para las FARC, Flores Collantes se constituyó en un enlace que permitió el tráfico de armas y de coca desde la región de Tingo María, en la selva central de Perú, hacia Leticia, capital del departamento colombiano de Amazonas, a la vez que este para el FDN se constituyó en su aliado en el país (InSightCrime, 2020). A través de los contactos establecidos con Los Caqueteños, la FDN proyectó una nueva ruta de narcotráfico que, desde el departamento de Vichada, pasando por Venezuela, llegaría a la Amazonía brasileña.

A la operación proyectada por el FDN en territorio colombiano se sumó la presencia del Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), que avanzaron sobre la zona fronteriza entre los departamentos de Putumayo, en Colombia, y Sucumbíos, en Ecuador, donde mantienen alianzas con integrantes de La Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación y los grupos ecuatorianos Los Choneros, Los Tiguerones, Los Lobos y Los Lagartos (Primicias, 2021).

En territorio colombiano la presencia del PCC se remonta a los años noventa, cuando el control del tráfico de estupefacientes se encontraba bajo el control de los grandes carteles de Cali y de Medellín, experiencia que le permitió al PCC adaptarse a los cambios de las estructuras y arribar a finales del primer decenio del nuevo siglo con un acumulado que le permitió llegar a acuerdos con miembros del Cartel del Golfo y de estructuras disidentes de las FARC, lo que le ha permitido extender sus tentáculos en territorio colombiano. La persistencia del PCC y las necesidades de fortalecerse llevaron a dicha organización a ofrecer a los guerrilleros disidentes engrosar las filas del PCC (Goi, 2017).

Desde esta perspectiva, ante el incremento del consumo interno de drogas en Brasil, la creciente demanda del mercado europeo, el trapezio amazónico ha cobrado especial importancia para las organizaciones del COT que, al actuar de manera

más coordinada y fortalecidas por las alianzas tanto regionales como extrarregionales, al hacer uso de los avances tecnológicos en comunicaciones y medios de transporte reconfiguran la geografía del narcotráfico suramericano (Quirós, 2019).

En la actualidad, como lo afirma la Defensoría del Pueblo (2021), las alianzas y la presencia de los diversas estructuras del COT en la región amazónica colombiana se reafirman con la articulación de las frentes 1 y 58 de las disidencias de las FARC con integrantes del Cartel de Sinaloa-La Mafia, las organizaciones brasileñas FDN, PCC y CV, y las organizaciones delincuenciales peruanas, todas las cuales, de manera coordinada, se dedican al narcotráfico, el tráfico de armas, la explotación ilícita de minerales y la trata de personas.

A la articulación de las organizaciones del COT en torno al narcotráfico se suman los intereses compartidos en la diversificación de sus actividades ilícitas ubicando la explotación ilícita de recursos naturales como una alternativa. Tomando en cuenta los estudios desarrollados por la organización Global Initiative (2016), la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas por parte de los gobiernos de Estado Unidos, Colombia y México, así como el incremento de los precios del oro en el mercado internacional, llevó a que las estructuras del COT vieran la explotación ilícita de minerales como una actividad que les facilita el lavado de activos y, a la vez, les proporciona un mayor rendimiento que el tráfico de cocaína. De ahí que el interés depositado en dicha actividad, en la que no se toman en cuenta la legislación ni las restricciones, ha ocasionado la deforestación de grandes extensiones de la selva amazónica, la contaminación de la cuenca del Amazonas, la trata de personas y el desplazamiento forzado de la población.

Por lo anterior, para el caso colombiano, a la explotación de los cultivos de coca y comercialización de la cocaína se suma la intervención de las estructuras de las disidencias de las FARC en la explotación ilegal de recursos mineros y, en particular, la explotación del oro, práctica que, de acuerdo con la analista Summer Walter, de la organización Global Initiative (2021), el desarrollo de la minería ilegal por parte de las disidencias de las FARC para 2016 le representó el 20 % de sus ingresos y, en consecuencia, una mayor afectación al medio ambiente y a los derechos de las poblaciones de la región amazónica.

El desarrollo de esta actividad ilícita, a la que, además de la explotación ilegal del oro, se suman otros minerales, como el coltán y los diamantes, se ha constituido en una grave amenaza a la existencia de la Amazonía. De acuerdo con el informe *Amazonía saqueada*, referido por Yvette Sierra (2019, párr. 2), en Colombia, uno de los casos de mayor impacto se registra en el parque Nacional Yapacana, donde

las empresas que explotan el oro en la región comprendida entre los ríos Orinoco y Ventuari, han establecido alianzas con integrantes de las disidencias de las FARC, que, en últimas, son los que mandan en las minas, imponen sus condiciones y producen graves afectaciones a las poblaciones y al medio ambiente.

Expansión y dinámica de las estructuras del crimen organizado transnacional

Para las organizaciones del COT, las políticas de seguridad adoptadas por los diversos Estados se constituyen en factores que deben tener en cuenta para diversificar y ajustar sus propios modos de actuar, así como las rutas y mercados. Para el caso de las organizaciones latinoamericanas, las operaciones de interdicción y lucha contra las organizaciones del crimen y el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos, así como la apreciación del euro frente al dólar y el monopolio del mercado de los narcóticos por parte de las organizaciones mexicanas, produjo que las organizaciones del crimen transnacional de Colombia, Brasil y Perú diversificaran las rutas y alianzas que mejor les permitan ubicar los narcóticos en otros mercados, como el europeo. A partir de esta decisión, hacia 2005 se desarrollaron los contactos entre las organizaciones criminales latinoamericanas —y en especial, las colombianas y las africanas—, con las que se garantizaron el tráfico seguro y el apoyo logístico de la operación (Sampó, 2019).

De acuerdo con el informe mundial sobre drogas (2022) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC), la producción de cocaína en 2020 registró un crecimiento del 11 % respecto a 2019, lo que significó una producción de 1.982 toneladas, cuya comercialización registró la expansión de nuevas rutas y mercados, como África y Asia (UNODC, 2022). Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas (2021), durante 2019 las organizaciones del crimen transnacional extendieron sus tentáculos hacia algunos países del África occidental y septentrional, como “Argelia, Côte d'Ivoire, Gambia, Marruecos y Sudáfrica” (ONU, 2021, p. 72). De acuerdo con la junta,

Se ha informado del aumento de las cantidades de droga procedentes de América del Sur en Europa, ya que los grupos delictivos sudamericanos han ampliado sus mercados y los grupos delictivos con base europea viajan ahora a América del Sur para gestionar los envíos de droga a Europa. (ONU, 2021, p. 93)

En este entramado transnacional la confluencia de las diversas organizaciones del crimen en España ha constituido una especial alianza, en el que cada grupo, de acuerdo con sus nacionalidades, desempeña su rol. Como señalan Sansó y Pascual (2018), desde Latinoamérica se lleva a cabo el proceso de siembra, procesamiento y transporte hasta el occidente de África, donde es recibida por otros actores del eslabón de la cadena que se encargan de la recepción y el transporte de la droga con destino a Europa. Finalmente, las mafias de Occidente custodian y controlan el proceso de distribución de la mercancía en el viejo continente.

Conclusiones

La disputa del territorio amazónico y de las actividades ilícitas, escenario en el que destaca la presencia de dos de los principales productores de coca, como lo son Colombia y Perú, incentiva la conformación y fortalecimiento de las organizaciones brasileñas del narcotráfico, que, motivadas por el abastecimiento del mercado interno, el control de las rutas del tráfico internacional de drogas ilícitas y el interés en lograr la hegemonía del mercado, ha producido sanguinarios enfrentamientos entre las diversas organizaciones del COT (Quirós, 2019).

En Brasil, la disputa por el control del negocio registró su pico más alto durante el periodo 2016- 2019, cuando los centros de reclusión de Manaus, en el estado de Amazonas, Boa Vista, en el estado amazónico de Roraima, y Altamira, en el estado amazónico de Pará, se volvieron los escenarios de confrontación entre las mafias del narcotráfico. De tal situación se destacó lo acontecido en 2017 en la cárcel de Manaus, capital del estado de Amazonas, por parte de los integrantes del enclave de la FDN contra los reos del PCC, y que produjo la muerte de 60 presos del penal. Además, en 2019 el enfrentamiento entre miembros del PCC y el CV ocasionó la muerte de 62 reclusos. (Alessi & Galarraga, 2019).

Posteriormente, hacia 2020, y motivados por el control del comercio de narcóticos procedentes de Colombia y Perú, se produjo la confrontación entre el Enclave de la FDN y los integrantes del CV teniendo de nuevo como escenario la ciudad de Manaus (InSightCrime, 2020).

En la Amazonía peruana, la confrontación entre las organizaciones del narcotráfico inició en 2008, cuando se registró en la isla de Santa Rosa, fronteriza con Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia), el enfrentamiento de las bandas Los Galleros y la banda de Jair Ardela Micchue, alias Javier, quienes, motivados por hacerse al control de la producción y las rutas, iniciaron la ola de violencia en la región;

al terror generado por los grupos peruanos se suma la presencia de integrantes de las disidencias de las FARC, quienes disputan el control de los cultivos ilícitos, las rutas y los *cristalizaderos* ubicados en el distrito Teniente Manuel Clavero, Puerto Veliz y la zona de Laguna Pacora, de la provincia peruana de Putumayo, con los grupos armados organizados (GAO) (León, 2018).

El comportamiento de los GAO residuales —y en particular, las estructuras o frentes de las extintas FARC—, caracterizado por la ejecución de actividades de narcotráfico, explotación ilícita de minerales, homicidios, extorsiones, amenazas e intimidaciones a la población y comunidades indígenas, ha producido graves impactos, que se reflejan en daños irreparables a la biodiversidad y la vida humana.

De acuerdo con el informe *Un clima peligroso. Deforestación, cambio climático y violencia contra los defensores ambientales en la Amazonía colombiana*, desarrollado por la FIP y Adelphi (2021), el desarrollo de la minería convencional e ilegal, la presencia de las estructuras ilegales y la expansión de la frontera agrícola y de cultivos de uso ilícito, así como la apropiación de tierras en la Amazonía colombiana ha llevado a que la región registre una mayor repercusión negativa sobre los parques nacionales Serranía de Chiribiquete, en el departamento de Caquetá, al igual que en el de Tinigua y la Serranía de La Macarena, en el departamento de Meta. De igual modo, el informe advierte el peligro que se cierne sobre la comunidad indígena nukak makú, así como sobre los municipios de Calamar y San José del Guaviare, en el departamento de Guaviare.

Al respecto, las cifras sobre las afectaciones reflejan una difícil realidad: según los estudios adelantados por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), citados por Lizcano (2018), entre 2017 y 2018 el total de hectáreas de la Amazonía afectadas ascendió a 160.000, de las cuales 90.000 se ubican en el corredor que une los parques nacionales naturales de la Serranía de Chiribiquete y La Macarena.

Posteriormente, el informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) (2021), hace constar que, del total de los bosques naturales de Colombia, el 66 % se ubica en la Amazonía, y que durante 2020 la región registró la deforestación de 109.302 ha, que corresponden al 63.7 % del total de afectaciones por este flagelo, lo que representa un incremento de 11.046 ha respecto al año anterior. Entre los departamentos amazónicos que registran incremento en la deforestación se encuentran: el departamento de Caquetá, con 32.522 ha; el departamento de Guaviare, con 25.553 ha; el departamento de Putumayo, con 13.141 ha, y el departamento de Amazonas, con 2.669 ha, todas las cuales corresponden a

prácticas de minería ilegal, cultivos de uso ilícito y tala ilegal, a las que se vinculan las organizaciones del crimen transnacional, que han promovido las quemas, la tala de los bosques para la siembra de coca y la adaptación de pistas clandestinas y de corredores de movilidad (Andrade, 2022).

En consecuencia, la Fiscalía General de la Nación (2021), mediante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos —y con base en elementos probatorios que dan fe de que, por instrucciones de los cabecillas de los frentes de las disidencias, se ejecutó la deforestación, de manera persistente y continua, del denominado “corredor marginal de la selva Amazónica”, considerado por la organización criminal como una ruta de valor estratégico que comunica la Serranía de La Macarena, en el departamento de Meta, con el municipio de San José del Guaviare, en el departamento de Guaviare—, imputó cargos a los cabecillas de las disidencias por los delitos de “invasión de área de especial importancia ecológica, daño a los recursos naturales, conservación o financiamiento de plantaciones, y concierto para delinquir” (Fiscalía General de la Nación, 2021, párr. 3).

Los efectos de las actividades de las estructuras del COT en el trapecio amazónico y la subregión de la cuenca del Putumayo se reflejan en las problemáticas que denuncia la Defensoría del Pueblo (2021), en las que advierte sobre la forma como integrantes de los frentes disidentes de las FARC, en alianza con miembros del Cartel de Sinaloa-La Mafia, las organizaciones brasileras FDN, PCC y CV y las organizaciones delincuenciales peruanas, con la práctica de narcotráfico, el tráfico de armas, la explotación ilícita de minerales y la trata de personas, se constituyen en una amenaza que pone en riesgo a más de 59.636 habitantes que conforman las comunidades indígenas y campesinas ubicadas sobre las cuencas de los ríos Amazonas y Putumayo, y en especial, las poblaciones que hacen parte del trapecio amazónico, como los municipios de Leticia y Puerto Nariño, donde viven las comunidades indígenas yaguas, ticunas y cocamas, y las áreas rurales de la cuenca del río Putumayo, de la que hacen parte las comunidades de Tarapacá, La Chorera, Puerto Arica, El Encanto y Puerto Alegría, en las que se encuentran las comunidades “Muina, Inga, Uitoto, Murui, Ticuna, Ocaína, Bora y Muinane” (Defensoría del Pueblo, 2021, p. 3).

Desde este contexto, la presencia y confrontación entre las diferentes facciones armadas produce una grave situación que vulnera los derechos de las comunidades “[...] a la vida, a la integridad, a la libertad, a la seguridad, al goce de las libertades civiles, políticas y de autonomía y libre autodeterminación de las comunidades indígenas” (Defensoría del Pueblo, 2021, p.11).

Referencias

- Alessi, G., & Galarraga, N. (2019). Cómo el crimen organizado impone su ley en las cárceles de Brasil. *El País*. <https://tinyurl.com/wcth5aet>
- Andrade, C. (2022). Amazonía bajo ataque. *Perfil*. <https://tinyurl.com/muuzvc5>
- Cajiao, J., González, P., Pardo, D., & Zapata, O. (2018). *Una aproximación al crimen transnacional organizado: redes de narcotráfico Colombia-España*. Documento de trabajo, Real Instituto Elcano. <https://acortar.link/JV3QgN>
- Cortés, D. (2020). Crimen transnacional organizado: las organizaciones del narcotráfico mexicano en Colombia. *Novum Jus* 14(2). <https://doi.org/10.14718/novumjus.2020.14.2.6>
- Defensoría del Pueblo. (2021). *Alerta temprana 002-21 del 26 de enero de 2021*. <https://alertastsg.blob.core.windows.net/alertas/002-21.pdf>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2018). *Censo Nacional de Población y Vivienda 2018*. DANE. <https://tinyurl.com/mrx53nrm>
- FIP & Adelphi (2021). *Un clima peligroso. Deforestación, cambio climático y violencia contra los defensores ambientales en la Amazonía colombiana*. [Resumen Ejecutivo]. WWF.
- Fiscalía General de la Nación. (2021). Fiscalía imputa a cabecillas de las disidencias de las FARC señalados de auspiciar la destrucción de la Amazonía. *Boletín* 41210.
- Fundación Seguridad y Democracia. (2008). Colombia: Seguridad y defensa en las fronteras. *Revista Coyuntura de Seguridad*, (21), 1-23. <http://www.scielo.org.co/pdf/crim/v50n1/v50n1a15.pdf>
- Global Initiative. (2016). El crimen organizado y la minería ilegal de oro en América Latina. <https://tinyurl.com/mr3h2uu7>
- Goi, L. (2017). PCC de Brasil estaría reclutando disidentes de las FARC. *InSightCrime*. <https://tinyurl.com/w32c6a37>
- Huerta, P. (2022). Narcobenefactores. El tributo del narco en las márgenes de la Amazonía peruana. LR Data. <https://acortar.link/1bRn0S>
- InSightCrime. (2020). *Familia del Norte (FDN)*. <https://tinyurl.com/5485z4u5>
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2021). *Resultados del monitoreo deforestación año 2020 y primer trimestre del año 2021*. IDEAM. <https://acortar.link/7Dn60j>
- León, R. (2018). Fuego cruzado en el Putumayo. *El Comercio*. <https://tinyurl.com/5n8z87d6>
- Lizcano, M. (2018). Mafias criminales se adueñan de los bosques en Colombia II. *Red Prensa Verde*. <https://tinyurl.com/3fn58u3u>
- López Castro, M. O. (2009) *Dinámicas espaciales y temporales del componente demográfico de la región amazónica colombiana*. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi. <https://tinyurl.com/43uav9w3>

- Londoño, E. A. (2015). La frontera como factor de integración regional. Análisis a partir del caso de la frontera entre Colombia y Perú. *Agenda Internacional*, 22(33), 191-208.
- Mejía, J., Díaz, J., Rendón, J., Bello, W., & Rincón, L. (2019). Amenazas a la seguridad de la región amazónica. Narcotráfico y minería ilegal. En *Amazonía. Poder y estrategia*. Escuela Superior de Guerra. <https://doi.org/10.25062/9789585698383.06>
- Montaño, F. (2022). Mejoras genéticas en cultivos de hoja de coca aumentan la producción mundial de cocaína. *Ojo Público*. <https://tinyurl.com/ykp5v37v>
- Noticias France 24*. (2020). Junio fue el mes con más incendios en la Amazonía de Brasil en 14 años. <https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210703-brasil-amazonia-incendios-jair-bolsonaro>
- Oficina de la Casa Blanca de la Política Nacional para el Control de Drogas ONDCP (2021). *Datos sobre el cultivo y la producción de coca en la región andina*. Embajada de los Estados Unidos. <https://tinyurl.com/24jksbnp>
- Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2021). Informe 2021. Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. <https://tinyurl.com/3rk7dete>
- Palacio, G. (2006). *Fiebre de tierra caliente: una historia ambiental de Colombia 1850-1930*. ILSA, Universidad Nacional de Colombia.
- Primicias*. (2021). Comandos brasileños acechan a la frontera ecuatoriana. <https://tinyurl.com/yck2rm9w>
- Quirós, L. (2019). *La expansión del Primeiro Comando da Capital en la frontera amazónica por lograr la hegemonía de las rutas de la droga*. Real Instituto Elcano. <https://acortar.link/fF8aLY>
- Sampó, C. (2019). El tráfico de cocaína entre América Latina y África Occidental. *Urvio, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad* (24), 187-203. <https://doi.org/10.17141/urvio.24.2019.3700>
- Sansó, D., & Pascual, R. (2018). *¿Por qué África? Desentrañando la geopolítica criminal del tráfico ilícito de cocaína entre América Latina y Europa (vía España)*. [Documento de trabajo 7/2018 - 12/4/2018]. Real Instituto Elcano. <https://acortar.link/udfv4R>
- Sierra, G. P. (2011). La fiebre del caucho en Colombia. *Credencial Historia*, 262.
- Sierra, Y. (2019). Minería ilegal: la peor devastación en la historia de la Amazonía. *Mongabay*. <https://tinyurl.com/5n78bezz>
- Soto, M. (2017). Brasil y Colombia: unidos en la trata. *Exame*. <https://exame.com/brasil/brasil-e-colombia-unidos-no-trafico-2/>
- UNODC. (2022). *World Drug Report 2022*. ONU.
- Villalba, J. (2019). Putumayo, donde las ex-FARC mafia ahora disputan la guerra por el narcotráfico. *InSight Crime*. <https://tinyurl.com/27u5zcsr>

Walter, S. (2021). Environmental crime: The not-so-hidden obstacle to combat climate change. *Global Initiative*. <https://tinyurl.com/58ds5t7a>

Zamora, D. (2021). ¿Por qué la pandemia golpeó tan fuerte al Amazonas colombiano? *Pesquisa Javeriana*. <https://tinyurl.com/36ep86bj>